

C.A. de Concepción

rtp

Concepción, dieciocho de abril de dos mil veinticuatro.

Visto:

Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de su fundamento 35° que se elimina.

Y se tiene, en su lugar y además, presente:

1º) Que por definición, la vivienda es el lugar de refugio de un ser humano, y aquella le debe proporcionar intimidad, espacio para resguardar sus pertenencias, desarrollar sus actividades cotidianas y protegerlo de las condiciones climáticas adversas.

El acceso a una vivienda digna es un derecho humano inalienable, ya que un techo inadecuado amenaza de forma directa su salud física y mental. De conformidad con el párrafo 1 del artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los Estados Partes *"reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia"*.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, en su Observación General N° 4, define y aclara lo que significa una vivienda digna, afirmando que en la actualidad una vivienda no se debe interpretar en un sentido restrictivo simplemente de cobijo sino, que debe considerarse más bien como *el espacio donde los individuos o las familias puedan vivir en seguridad, paz y dignidad*.

Siguiendo las definiciones de derecho internacional, para que una vivienda sea digna y adecuada, además de ser fija y habitable, debe ser de calidad, asequible y accesible, otorgar seguridad jurídica en su tenencia, que se ubiquen en espacios plenamente equipados, en barrios dotados de servicios urbanos, con espacios intermedios de relación que permita la comunicación vecinal, viviendas donde sea



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TMXKXNMHPX

posible el desarrollo familiar y personal a todos los niveles que la sociedad demanda.

2º) Que el contenido que el derecho internacional de los derechos humanos le otorga a la vivienda digna, es preciso traerlo a colación para efecto de definir la decisión sobre el daño moral reclamado.

Sobre el particular, es preciso razonar que, sin mayor distinción sobre las especies de daño extrapatrimonial, la jurisprudencia lo ha definido como el dolor, pesar, angustia y molestias síquicas que sufre una persona en sus sentimientos a consecuencia del hecho ilícito; también como el sufrimiento que experimenta una persona por una herida, la muerte de una persona querida, una ofensa a su dignidad u honor, la destrucción de una cosa de afección y, en términos generales, como un hecho externo que afecta la integridad física o moral del individuo.

Las antedichas definiciones largamente desarrolladas por la jurisprudencia y la doctrina caracterizan el *pretium doloris* y ha sido la forma de entender la indemnización del daño moral en Chile; sin embargo, el daño moral es un concepto jurídico mucho más amplio y es así que bajo este concepto se indemniza el dolor de las heridas y el tratamiento médico, la pérdida de los sentimientos de valía personal o el impacto de una pérdida familiar y lo que esto acarrea para la persona que lo sufre.

Es así que el daño moral queda integrado por todas aquellas manifestaciones psicológicas, afectivas, emocionales o íntimas que sufre un perjudicado por el acaecimiento de una conducta ilícita y que no son constatables de forma directa, pero también se extiende a todo agravio que sufre la dignidad, honorabilidad, integridad física o cualquier elemento que pudiere alterar de manera lesiva la normalidad de las facultades mentales o espirituales de una persona.

3º) Que, en este sentido, el daño es posible construirlo a través de una presunción judicial con los caracteres de gravedad y precisión



que exige el artículo 426 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto resulta o es consecuencia lógica del hecho de haber vivido por más de ocho años en viviendas que eran inhabitables e indignas, con filtraciones, presencia de hongos, deficiencias eléctricas con riesgos de incendio y cortocircuitos, inestabilidad de entrepiso y escaleras, entre otros desperfectos establecidos en la sentencia que se revisa, las que afectaron las normales condiciones de vida de los demandantes. Es por ello también un agravio a su dignidad.

Cabe señalar que los demandantes son personas –y sus familias– que por muchos años debieron no sólo ahorrar el dinero necesario, sino que organizarse, postular a los servicios que otorga el Estado, recorrer un largo camino para obtener la vivienda. Un objetivo que la conciencia colectiva describe, sin lugar a dudas, como el cumplimiento del “sueño de la casa propia”, que en este caso se vio truncado al poco tiempo de haber empezado a vivir en ellas, por los graves defectos en la construcción de las mismas, que por años los ha obligado a reclamar reparaciones, a realizarlas por sí mismos o a buscar soluciones alternativas como abandonar las viviendas y finalmente, decidir por el ejercicio de esta acción.

Esta decepción, molestia, trastornos de la normalidad de la vida, afectación de la salud, riesgos y afectación de la dignidad, es precisamente un daño moral, que debe ser indemnizado.

4º) Que, en estas condiciones y a fin de determinar prudencialmente aquel que será concedido a los actores de esta causa, se considerará como referencia el otorgado en los autos Rol N° 1012-2020 del ingreso de esta Corte y que corresponde a otros habitantes del mismo conjunto habitacional, quienes en marzo de 2022 les fue otorgado un monto de \$10.000.000 por concepto de daño moral.

Considerando dicho monto y la desvalorización propia del dinero, es que en el presente caso y con la fecha de esta sentencia, se regulará el daño moral de cada uno de los demandantes en la suma de \$12.000.000 (doce millones de pesos).



Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 144 y 186 del Código de Procedimiento Civil, SE REVOCA, en lo apelado, la sentencia apelada de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, en cuanto por su decisión III.- rechaza la demanda en relación al daño moral declarándose, en su lugar, que SE ACOGE dicha pretensión indemnizatoria y se condena a los demandados a pagar a cada uno de los actores la suma de \$12.000.000 (doce millones de pesos) por concepto de daño moral.

Dicha suma será pagada con reajustes conforme a la variación del IPC desde la fecha de esta sentencia hasta el mes anterior a su pago efectivo e intereses corrientes para operaciones reajustables desde que la demandada se constituya en mora.

Redacción de la ministra Carola Rivas Vargas.

Regístrese y devuélvase.

N°Civil-3182-2022.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TMXKXNXMHPX

Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Concepción integrada por los Ministros (as) Carola Rivas V., Juan Angel Muñoz L. y Ministra Suplente Jimena Cecilia Troncoso S. Concepcion, dieciocho de abril de dos mil veinticuatro.

En Concepcion, a dieciocho de abril de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TMXKXNXMHPX